

LA CONTRALORÍA CONCLUYE:

Los municipios no cuentan con documento de Política ambiental, en la cual definan los lineamientos y que surja como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas a partir de un proceso de construcción conjunta con las instituciones y comunidad, teniendo como premisa que todo deterioro o afectación incide negativamente en forma transversal al desarrollo sostenible en todos los ámbitos y por ende conlleva al desmejoramiento en la calidad de vida y bienestar de la comunidad.

No tienen identificados los impactos ambientales y no están plasmados en un documento donde se consigne en detalle el recurso afectado: Hídrico, Suelo, Aire, Flora, Fauna, Paisajístico, Socioeconómico, Seguridad, Salud, Trabajo y explotación infantil entre otros y las zonas Veredales afectadas, cuantificando la magnitud del problema y población afectada.

La gestión ambiental en los últimos tres años en los 46 sujetos de control, se presentan avances, pero continua faltando una política de sostenibilidad ambiental, con elementos orientadores tales como indicadores de impacto ambiental; se continua con limitantes de integración de todas las políticas sectoriales que permitan canalizar esfuerzos y recursos, el establecimiento de metas y objetivos conjuntos medibles y el diseño de indicadores de seguimiento y control de avances y resultados de la gestión ambiental institucional.

En otras áreas de la gestión ambiental no se ha cuantificado el costo social o ambiental de la poca gestión. Pocos estudios e investigaciones se han adelantado sobre el impacto en la salud y pérdida de bienestar que generan la contaminación ambiental, contaminación hídrica, residuos sólidos, la degradación y pérdida de biodiversidad, así se notó en el estudio sobre saneamiento básico realizado por este ente de control con los municipios.

Existe una mínima asignación de recursos por parte de las administraciones municipales, que no permite el mejoramiento de la calidad y prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, lo cual va en contravía del mandato constitucional, al derecho colectivo a un ambiente sano.

Las administraciones municipales no han empezado adelantar ejercicios de valoración ambiental, conforme a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, la Cuenta 18 donde se debe cuantificar los recursos naturales renovables y no renovables.

Los municipios para su desempeño ambiental, continúan dependiendo de los recursos provenientes de las regalías y del sistema general de participación, siendo mayor la

cantidad recibida por regalías; no obstante, la inversión más alta fue la realizada en saneamiento básico, equivalente a \$52.082 millones de pesos y la menor la representada en subsidios igual a \$7.267 millones de pesos.

las regalías, entendiéndose como tal, los ingresos recibidos por las participaciones en los ingresos producto de la explotación petrolera, aurífera, de material de arrastre y otros productos no renovables, las compensaciones por transporte de gas, petróleo y las transferencias del fondo nacional de regalías. Este grupo aportó a los ingresos del sector del medio ambiente el segundo monto en importancia representado en la suma de \$9.881 millones de pesos equivalentes al 17.06% del total de los Ingresos.

En el departamento las tarifas de agua siguen siendo muy bajas, pero lo más preocupante es que ni un solo municipio, de un total de 46, suministran agua apta para el consumo humano según los datos resultantes del seguimiento y control que realiza la Secretaría de Salud Departamental.

Calidad del agua y enfermedades de origen hídrico. En la medida en que los municipios no den solución al problema de la contaminación de las fuentes de agua ni mantengan un control permanente sobre el agua suministrada, se incrementarán los costos en salud y se harán ineficientes las inversiones que se realicen en plantas de tratamiento de agua potable.

El costo de la tarifa no se ajusta a las exigencias de la C.R.A. debido a la intervención de los miembros de las juntas directivas de las Empresas de Servicios Públicos, de los alcaldes y de los concejales.

En el 2012, se empiezan a notar efectos en las inversiones en acueducto en los municipios que han iniciado los convenios con el Plan Departamental de aguas, el cual inició en dicha vigencia. De este Plan se esperan grandes inversiones en los próximos años, buscando la dotación de agua potable en todo el departamento.

En todas las auditorías realizadas, no se adelantan programas que permitan tener un buen uso del espacio público, al encontrarse carros parqueados en sitios no autorizados, vendedores ambulantes con puesto de ventas en las aceras y vías, casetas en vías públicas, pero sobre todo en los sitios aledaños a las plazas de mercado reina la anarquía, donde se cuenta con la complacencia de las autoridades encargadas de hacer respetar el espacio público, como en el caso de los Municipios del Palocabildo, Rovira, Prado y Roncesvalles.

Son muy pocos los municipios que están cumpliendo con el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 Ley 1151 del 2007 Art. 106, y es muy poco el interés de los alcaldes. Con este

proceder, están coadyuvando a la desaparición de las fuentes hídricas que proveen el agua a los acueductos municipales y Veredales, falta por conseguir un porcentaje amplio de terrenos en microcuencas. Se continúa haciendo caso omiso al cumplimiento de la norma, por muchas administraciones municipales.

La mayoría de las cabeceras municipales y centros poblados Tolimenses tienen su río o quebrada convertida en una alcantarilla a la cual vierten todas las aguas residuales domésticas, desechos de hospitales, mataderos y porquerizas. No se cuenta con ningún tipo de tratamiento.

Sólo 18 municipios cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales o han iniciado procesos de descontaminación. 12 cuentan con laguna entre ellos Alpujarra, Ambalema, Alvarado, Piedras, Ataco, Espinal, Flandes, Lérida, Purificación, Venadillo, San Luis, Suarez y 6 municipios cuentan rectores pero no están en uso, Coello, Honda, Icononzo, Murillo, Natagaima, Piedras. Se requieren fuertes inversiones para lograr este propósito.

En ocasiones, las partidas que se reportan como gasto ambiental están incluidas en otros rubros como salud (PAB, factores de riesgo ambiental), gastos generales, vivienda, fortalecimiento institucional, sector agropecuario, etc. En los proyectos de infraestructura que requieren licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, no se presentan cifras exactas sobre el costo de los estudios y la ejecución del mismo se incluye en el costo global del proyecto.

El deterioro ambiental aumenta debido al crecimiento y concentración de la población en centros urbanos, crecimiento de actividades económicas, explotación creciente de recursos naturales, fenómenos sociales como cultivos ilícitos, desplazamiento forzado etc. No obstante estos factores, la inversión en muchos casos está disminuyendo o se mantiene estable.

Un porcentaje significativo de los recursos para medio ambiente se destinan a manejo integral de residuos sólidos, descuidando otras áreas de interés ambiental como manejo y disposición de desechos líquidos, protección de fauna y flora, espacio público, que también requieren de especial atención dentro de la gestión ambiental municipal. Es preciso reorientar la inversión ambiental

Transferencia del sector eléctrico. De acuerdo con la Ley 99 de 1993, estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el Plan de Desarrollo Municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. En la vigencia 2012 ascendieron a la suma \$133.292 millones de pesos.

Los recursos asignados anualmente para prevención y atención de desastres en los presupuestos municipales no son significativos; con frecuencia se trasladan o no se invierten. En la vigencia 2012, los 27 municipios que invirtieron recursos por este concepto, alcanzaron la suma de \$1.023 millones de pesos equivalentes al 25.6% de los aportes al grupo; en su mayoría estos recursos pasan a fortalecer los cuerpos de bomberos de sus localidades y a la de los habitantes de las zonas de riesgo.

Para este grupo se destaca la inversión realizada por los siguientes municipios: Coello con \$ 178 millones de pesos equivalentes al 17.42% de los aportes, siendo este el valor más alto del grupo; Villarrica con \$ 7,5 millones de pesos equivalentes al 0.073% de los aportes, siendo esta la contribución más baja. Es importante mencionar que 19 de los 46 municipios no tienen ningún tipo de participación en este grupo.

Pocos Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres permanecen activos, de conformidad con su razón de ser. Con frecuencia, sólo se reúnen luego de ocurrida una emergencia para coordinar y tramitar las ayudas y auxilios oficiales.

La falta de programas de control sobre la caza y tala de bosques nativos ha permitido el aumento en el número de especies en vías de extinción, como el caso de la problemática sobre la PALMA DE CERA (*Ceroxylum quindianense*) y del Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*). Tampoco se cuenta con un inventario que permita cuantificar y conocer las necesidades del recurso flora y fauna en el Tolima.